

Movimiento campesino y política agraria en México, 1976-1982 *

LUISA PARÉ

Hasta fechas muy recientes parecía existir una contradicción entre el reconocimiento del carácter multifacético de las reivindicaciones del campesino mexicano (simultáneamente como jornalero, productor, artesano, solicitante de tierra, etc.), y las opciones unilaterales que las más de las veces les ofrecían tanto sus organizaciones como sus teóricos. Esto constituía sin duda una limitación importante para la construcción de un proyecto unificador. Aun cuando muchas de las organizaciones levantan todas las demandas del campesinado, como productores, como solicitantes de tierra y como obreros agrícolas, en la práctica, como se ve en el esquema de la página 38, se enfatiza un frente de lucha más que otro.

El reto del movimiento campesino es precisamente la integración de todas las demandas y la lucha simultánea en los diversos frentes. En torno a este tipo de cuestionamientos es que se ha desarrollado una falsa polémica respecto al problema agrario, la de “descampesinización” *versus* proletarianización, lucha por la tierra *versus* lucha sindical.

Sin detenernos en esta discusión, recordemos solamente que algunos autores y organizaciones, en cierto momento, enfatizaban el proceso de proletarianización del campesino mexicano y situaban como contradicción fundamental la que opone el trabajador asalariado del campo a la burguesía agraria, y como sujeto revolucionario, por excelencia, el obrero agrícola movilizado en torno a sus reivindicaciones laborales y por su sindicalización. Se cuestionaba incluso el potencial del campesinado para apoyar cualquier cambio político de carácter anticapitalista, debido al papel de base social de apoyo al Estado mexicano y su sistema político, brindado por el campesinado desde la Revolución. Quienes encontraban en las reivindicaciones de los campesinos en torno a la defensa o la recuperación de la tierra un

* Este artículo se compone de algunos fragmentos del libro *Política agraria y movimiento campesino, 1976-1982*, elaborado en el marco del Seminario dirigido por el doctor González Casanova sobre Movimientos Sociales en México, y que será publicado en Siglo XXI. Los autores son Graciela Flores Lúa, Luisa Paré y Sergio Sarmiento. La coordinación estuvo a cargo de Luisa Paré.

eje organizativo, eran tachados de "populistas" empeñados en preservar la comunidad campesina, a pesar de la tendencia general del desarrollo capitalista en el campo. La discusión se polarizó tanto que, al final de cuentas, cada posición quedó distorsionada y hasta irreconocible para quienes la sostenían en un primer momento.

Ahora parece superada, por lo menos a nivel de las organizaciones, la falsa disyuntiva campesinación-proletarización, lucha por la tierra-lucha sindical, polémica que de hecho preocupó más a los círculos académicos que a las organizaciones campesinas en la segunda mitad de los setenta. Ahora, a mediados de los ochenta, la polémica parece estarse desplazando a otro nivel: lucha por la tierra o lucha por la producción, como veremos más adelante.

En este artículo me propongo sintetizar cuáles son las principales demandas del movimiento campesino actual (1976-1982) y unas reflexiones acerca de la forma como se articula este movimiento en diferentes frentes de lucha. Para descubrir el posible elemento unificador de un movimiento, que se nos presenta hoy en día como disperso y fragmentado, es necesario entender las limitaciones que dificultan su articulación, en un proyecto suficientemente cohesionado para enfrentar la política anticampesina actual. Esta necesidad nos llevará a algunas consideraciones acerca de las corrientes políticas que se expresan en el movimiento.

Antes de examinar las perspectivas globales del movimiento, hacemos un breve resumen de la política agraria reciente correspondiente al proyecto de las clases dominantes, de las tendencias observadas en cada frente de lucha y algunas reflexiones acerca de su posible desenvolvimiento en las condiciones actuales de la crisis y de la política agraria.

La crisis de producción en el agro es planteada por el gobierno de José López Portillo como una crisis agrícola y no como una crisis agraria o social, y mucho menos estructural. En el seno del bloque dominante se da un debate acerca del papel de la agricultura en el desarrollo económico del país. Los sectores más poderosos de la burguesía rural defienden la teoría, y sobre todo la práctica de las ventajas comparativas, y por lo tanto la orientación agroexportadora de hortalizas y ganado principalmente a Estados Unidos, con el fin de tener divisas para el "desarrollo del país". Sin embargo, es bien sabido que las divisas obtenidas de esta manera alimentan cuentas bancarias en Texas y California más que el desarrollo de México. En la nueva coyuntura de la crisis, el abastecimiento de granos básicos depende cada vez más de la exportación del petróleo y se ve así sujeto a las presiones de carácter comercial implícitas en los cambios de precio del crudo en el mercado mundial y, sobre todo, a las presiones del FMI para el pago de los servicios de la enorme deuda externa de México.

La autosuficiencia alimentaria es planteada momentáneamente por algunos sectores nacionalistas dentro del Estado como indispensable para un desarrollo económico más autónomo y por razones de soberanía nacional.

A partir de 1979, con el SAM,* la autosuficiencia alimentaria será el nuevo terreno en el que se intentará encuadrar las viejas demandas campesinas. Este proyecto alimentará diferentes respuestas dentro del movimiento, sea por ser recogido, rechazado o utilizado tácticamente.

Sin embargo, para ciertos sectores dentro del gobierno y para la burguesía agraria, la eficiencia y la productividad son incompatibles con el sector social de la agricultura al que se culpa de la crisis agrícola. En una especie de compromiso entre los diferentes intereses de clase que se manifiestan en el campo, por una parte se le propone al campesinado un nuevo pacto social, una alianza con el Estado, en torno a un objetivo abstracto, la autosuficiencia alimentaria, al mismo tiempo se avanza en la elaboración de un marco jurídico y organizativo (LFA) destinado a facilitar la privatización del campo. El primer aspecto de esta política aparentemente contradictoria, es decir, el nuevo pacto social, corresponde a los mecanismos de creación de consenso propios del sistema político: transformar en interés público, de la nación, algún objetivo, sin relacionarlo con los intereses específicos de la clase a la que se pretende beneficiar. La privatización del campo por otro lado, se inscribe en un doble cambio que se presenta a partir de la mitad de la década de los setenta.

Por una parte, después del período neopopulista que imperó durante el gobierno de Echeverría, se da en el ámbito político un fenómeno relativamente nuevo, que consiste en la cada vez mayor injerencia directa de los empresarios en la administración pública. De esta manera, es muy fuerte, en la SARH sobre todo, la influencia de la burguesía agraria, especialmente desde 1976. De manera colateral, como se indicó anteriormente, ha habido un desplazamiento de muchos cuadros políticos tradicionales de la CNC por promotores y técnicos de la propia SARH.

El segundo cambio es la política de austeridad resultante de la aplicación de los lineamientos del FMI para el pago de la deuda externa. La reducción del gasto del sector público y la cada vez mayor privatización de la economía, llevaron consigo el recorte de programas de bienestar social y una canalización de los subsidios de manera preferencial hacia la burguesía agraria. De esta manera, se abre una brecha cada vez más ancha entre el discurso político (alianza Estado-campesinos, SAM, PND, PRONAL, PRONADER, etc.) por un lado y, por otro, la política real.

* El SAM (Sistema Alimentario Mexicano) fue el programa del gobierno de JLP para el campo, programa que se planteaba a través de subsidios a la producción y la "Alianza Estado-Campesinos" recuperar la autosuficiencia alimentaria. El enfoque fue netamente productivista y no consideraba la necesidad de cambios estructurales (vía reparto de la tierra, nacionalización de la industria agroalimentaria). Fue un programa muy costoso que benefició principalmente a algunos sectores de la burguesía agraria y del campesinado acomodado y se vio cancelada su continuidad en el marco de la crisis a partir de 1982. Al no trastocar los fundamentos de la estructura agraria, una vez sepultado el programa, no se dejaría sentir ningún efecto posterior del SAM.

Es así como en el sexenio de López Portillo, el gobierno desentierra el hacha de guerra al plantar la bandera blanca, la vieja bandera callista, por varios estados. Muy reducidos son los sectores del campesinado que encontrarían su pipa de la paz en el SAM y en la Alianza entre el Estado y los campesinos. El proyecto de autosuficiencia alimentaria, así como ha sido planteado actualmente, tiene un carácter netamente burgués porque, de hecho, la actual política de precios sigue impulsando otros cultivos que los básicos (por ej. sorgo, cebada), sin cuestionar a fondo la orientación de la producción hacia las necesidades del mercado norteamericano y la actual concentración de recursos, principalmente la tierra. El carácter nacionalista del proyecto es más que relativo porque no se propone en la práctica una independencia tecnológica sino que, al contrario, propicia una cada vez mayor intervención del capital extranjero y de las agroindustrias multinacionales como salida a la crisis.

Por otra parte, la marginación del sector social de la agricultura que se ha venido dando desde 1940 se matiza ahora y sobre todo se profundiza. Por una parte, se trata de someter las mejores tierras, todavía en manos del campesinado, a la lógica del capital (distritos de temporal, unidades mixtas de producción, Ley de Fomento Agropecuario, Unidades de Desarrollo Rural, SARH como supersecretaría en el campo). Por otra parte, las zonas marginales parecen estar destinadas a especializarse en su marginación ya que, en lugar de desarrollar su potencial productivo, por mínimos que sean sus recursos, son tratadas únicamente como objetos de subsidio al consumo, lo que las vuelve cada vez más dependientes, sobre todo para su abastecimiento en granos.

En otras palabras, la nueva política agraria, redefine selectivamente los beneficiarios de la reforma agraria. Una reedición de la Ley Lerdo como lo sugería una vez Roger Bartra. Así como la propiedad comunal y eclesiástica estorbaban en el siglo pasado el desarrollo del capitalismo, se trata ahora de rescatar las tierras campesinas, con cierto potencial agrícola, del "autoconsumismo" campesino o de proyectos alternativos que no corresponden a las necesidades generales del modelo actual de acumulación.

A grandes rasgos, éstas son las tendencias generales y la redefinición de la política agropecuaria en el marco de la actual crisis económica. Sin embargo no nos parece prudente hablar de una sola política oficial muy definida ya que ésta se ve sujeta a múltiples presiones internas dentro del propio gobierno, presiones correspondientes a los intereses de diferentes grupos: desde empresarios, políticos y agricultores ligados a grandes multinacionales o al "agrobusiness" hasta tecnócratas nacionalistas.

Resumiendo, esta política consiste en: mayores apoyos jurídicos y económicos a la propiedad privada, en particular a la gran propiedad a costa del sector social, subordinación de la economía campesina al gran capital, en particular a las multinacionales y proletarización subsecuente, precios de garantía que siguen favoreciendo los cultivos destinados a la producción

de carne, consumida principalmente en el extranjero o en México por las clases medias y altas de la sociedad. Detrás de esta política se percibe la fuerza de la gran burguesía territorial que busca capitalizar más sus empresas, orientarse lo más posible hacia los cultivos más redituables en el mercado internacional y sobre todo mantener o elevar sus tasas de ganancia.

En esta redefinición de los beneficiarios de la reforma agraria, se redefine también el carácter de la lucha por la tierra y de la lucha por el control del proceso productivo en la agricultura.

Como se señaló al principio, el movimiento campesino se nos presenta como fragmentado en diferentes frentes de lucha, algunos con puntos de articulación entre sí y otros no, o nos es posible, en el marco de este trabajo, referirnos a cada una de las organizaciones que integran el movimiento campesino independiente. Para subsanar esta deficiencia remitimos al lector al esquema de la página siguiente.

Dentro del movimiento campesino con manifestaciones orgánicas hay que distinguir dos situaciones diferentes o dos bloques. La aceptación más común de la noción misma de movimiento campesino en los medios oficiales se refiere a éste como "movimiento campesino organizado". Por otra parte, los campesinos en lucha no incluidos en este primer bloque se refieren a su movimiento como "movimiento campesino independiente".

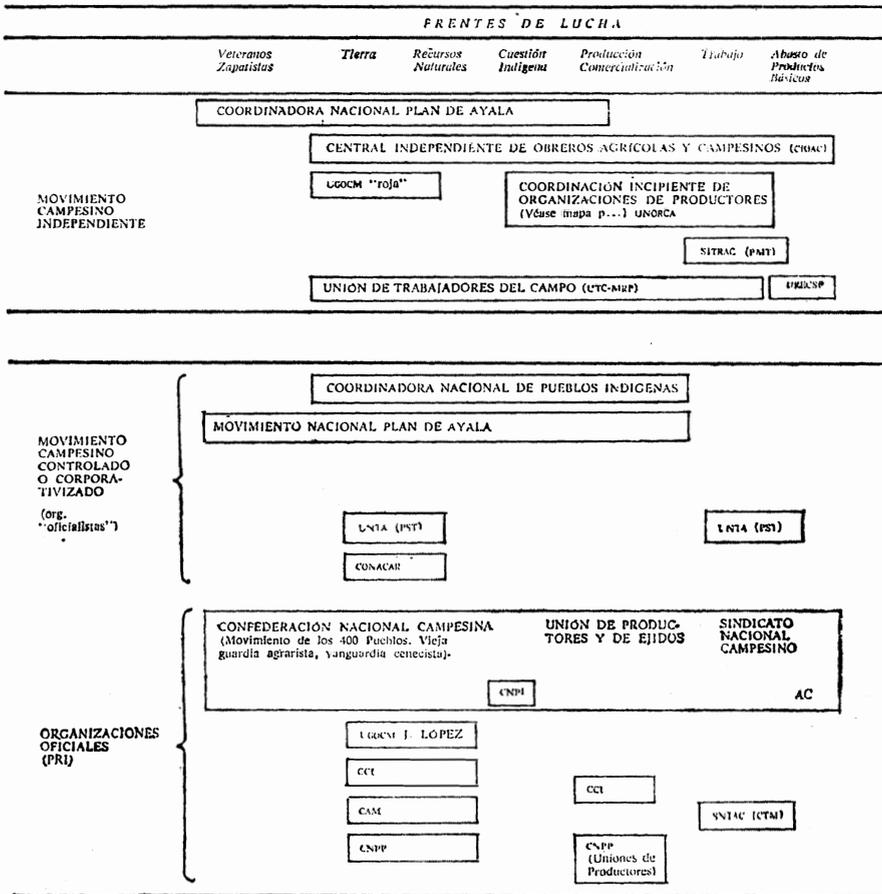
En el primer caso, el movimiento campesino "organizado" que nosotros llamaríamos más bien el "oficial", se ubican las manifestaciones de un amplio sector del campesinado corporativizado, afiliado a la central campesina, integrada al partido en el poder (la CNC) o a otras organizaciones cuya dirección está directamente vinculada al PRI, (CAM, CCI, UGOCM). Desde el punto de vista de quienes utilizan la expresión "movimiento campesino organizado", el factor organización se refiere más que a una participación democrática, autogestiva de los campesinos en estas centrales, a su incorporación masiva, colectiva y, muchas veces, involuntaria al partido en el poder.

Para evaluar la importancia que tiene para el movimiento campesino la creación de organizaciones autónomas, independientes del Estado, es necesaria una breve referencia al proceso de corporativización del campesinado mexicano.

Desde el final de la lucha armada, el Estado se encargaría de impedir y destruir, cuando se presentaba, la organización conjunta de los obreros y de los campesinos. A pesar de la fuerza mediatizadora del Estado con relación a las demandas agrarias, en algunos casos, principalmente en las grandes haciendas algodoneras, azucareras y henequeneras, núcleos de obreros agrícolas e industriales habían logrado organizarse conjuntamente con otros sectores de las clases explotadas (campesinos, artesanos, pequeños comerciantes).

Sin embargo, a partir de la creación de la CNC en 1938, con el pretexto de la necesidad de unificar las muchas organizaciones campesinas regionales

PANORAMA GENERAL DE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES Y FRENTE CAMPESINOS DE CARÁCTER NACIONAL



UGOCM: Unión General de Obreros y Campesinos.
SITRAC: Sindicato de Trabajadores del Campo; **PMT (Partido Mexicano de los Trabajadores)**
UNTA: Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; **PSY (Partido Socialista de los Trabajadores)**
MRP: Movimiento Revolucionario del Pueblo
CONACAR: Consejo Nacional Carbonista
CNPI: Consejo Nacional de Pueblos Indígenas
CNPI: Consejo Nacional de Pueblos Indígenas
CCI: Central Campesina Independiente
CAM: Consejo Agrarista Mexicano
CNPP: Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad
URICSP: Unión Regional de Ejidos y Comunidades del Sur de Puebla
UNORCA: Unión Nacional de Organizaciones Regionales Autónomas Campesinas
AC: Autorcha Campesina

existentes, el Estado asumió la organización del campesinado. La relación horizontal, es decir de organización de clase a organización de clase fue remplazada por una relación vertical de cada una con el partido oficial (PRM) que así se presenta como un partido de masas.

Paradójicamente ese partido de masas y sus organizaciones corporativas tendrían como función principal el control y la mediatización del bloque de las clases dominadas que a la vez serían su propio sustento. La paradoja consiste en que este poder, aparentemente emanado de las masas, ha servido y sigue sirviendo a la creación de las condiciones óptimas para la reproducción del gran capital nacional y extranjero a cambio de su explotación. La base de este pacto de colaboración de clases son prestaciones sociales no poco significativas aunque limitadas a una minoría. Sería el caso de los cañeros, henequeneros y otros productores ligados a agroindustrias estatales y únicos derechohabientes de una seguridad social mínima (asistencia médica y pensión) más o menos formalizada.

De esta manera, la función principal de la CNC sería, sobre todo a partir de 1940, la de servir de correa de transmisión entre las políticas económicas de los regímenes en turno, para el campo, y el sector campesino representado por dicha central. Como parte de este papel estas organizaciones tuvieron acceso al manejo de las prestaciones sociales. El movimiento campesino "organizado", en ningún momento impugnó de manera global los proyectos estatales y menos ha sido capaz de presentar una estrategia alternativa, correspondiente a los intereses históricos de sus bases.

En resumen, lo que caracteriza al movimiento campesino "organizado" o mejor dicho "corporativizado" es entonces su subordinación al proyecto del partido en el poder y en general del Estado capitalista.

Cuando se habla de movimiento campesino independiente, para muchos queda implícito que no existe otra cosa y para otros lo "independiente" resulta ser una categoría muy vaga, y en parte es cierto. De esta vaguedad se desprende una falta de consenso respecto a quiénes deben ser incluidos en un tipo de movimiento u otro.

El llamado movimiento campesino independiente quien, de manera ininterrumpida, aunque aislada, se ha manifestado desde 1920, para nosotros se define, en oposición al oficial, básicamente por: a) La preocupación junto con el resto de las clases dominadas por definir una estrategia general de desarrollo agrícola favorable a sus intereses y la unificación de las demandas correspondientes en un proyecto común, alternativo al proyecto burgués; b) para lograr lo anterior, se considera necesario deslindarse de la filiación partidaria de carácter corporativo (al PRI) para poder recuperar la autonomía de la organización de clase. (Respecto a este aspecto, dentro del movimiento campesino independiente, habría que distinguir diferentes posiciones. Por una parte, las organizaciones o centrales que constituyen abiertamente el brazo campesino de alguna organización partidaria, por otra parte aquellas en las cuales intervienen diferentes agrupaciones

partidarias o corrientes políticas, y finalmente otras que, sin prohibir a sus miembros una filiación partidaria individual tienden a rechazar tanto al PRI como a todos los partidos políticos de oposición); *c*) la defensa de los intereses de sus miembros en lugar del acatamiento compulsivo y coercitivo de una política agraria orientada a desarrollar prioritariamente el sector privado de la agricultura a costa del social, y a favorecer los intereses del gran capital; *d*) el intento de desarrollar nuevas formas de organización colectiva y de participación autogestiva y democrática de las bases.

Además de estas características, parte del movimiento campesino independiente, por lo menos a nivel de las direcciones y cuadros medios, busca no sólo la solución a las demandas de sus miembros como es la tierra, el agua, créditos, etc., sino que su proyecto es más amplio y se centra en torno a la recuperación o creación de organizaciones autónomas de clase, perdidas en el proceso de subordinación de la CNC a la política estatal. En resumen, el criterio de diferenciación más importante entre las organizaciones oficiales y las independientes radica en el tipo de relación que en cada caso se mantiene con el Estado.

Una vez más, aquí el esquematismo no sería de gran ayuda. El movimiento campesino oficial, aun cuando en lo general sirve para avalar las políticas decididas desde arriba por la burocracia política, en muchas ocasiones se ve en la obligación de recoger e incluso de impulsar las demandas de sus miembros para mantener vivo el consenso. Un buen ejemplo sería el movimiento cañero a principios de los setenta y de manera recurrente desde entonces. De esta manera y visto desde la óptica de la participación de los campesinos, no se puede trazar una frontera exacta entre el movimiento campesino corporativo y el independiente. Incluso se dan casos de alianzas o coaliciones coyunturales que incluyen miembros de organizaciones independientes y de organizaciones oficiales.

Asimismo, dentro del llamado movimiento campesino independiente encontramos desde las posiciones para las cuales cualquier relación con los aparatos de Estado es considerada como un acto de subordinación política que implica el riesgo de perder bases sociales o fuerzas políticas, hasta otras que, en la práctica, defienden una política de alianzas tácticas con el Estado, dentro de una concepción de acumular fuerzas y de ganarle espacios a la burguesía.

Cabe señalar la existencia de una serie de organizaciones intermedias entre ambos bloques. Se trata de lo que llamamos organizaciones "semi-oficiales" u "oficialistas" para distinguirlas de la CNC y de sus organizaciones miembros. La mayoría de las veces, estas organizaciones surgen a partir de desavenencias entre los propios líderes de la CNC o como movimientos más radicales que rápidamente son cooptados por el PRI. En ocasiones los líderes sostienen un lenguaje radical e, incluso, las bases de estas organizaciones se lanzan o son lanzadas a acciones directas, más o menos desesperadas, cuando sus dirigentes, en realidad, están en total con-

tubernio con los gobiernos estatales, el federal, con las centrales oficiales y, en ocasiones, hasta con los latifundistas. Este tipo de organizaciones funciona como válvula de escape. En ocasiones las acciones de sus bases (por ejemplo las tomas de tierras) rebasan los lineamientos generales de política agraria avalada por sus líderes, quienes por lo general saben encauzar el radicalismo a cambio de alguna curul.

LA LUCHA POR LA TIERRA

En torno a esta demanda se ha desarrollado en los últimos años un movimiento de carácter nacional, independiente de las organizaciones oficiales. Fuerzas que anteriormente se expresaban a nivel local o regional han logrado una coordinación nacional y avanzado en el proceso de construcción de organizaciones autónomas.

El período de Luis Echeverría Álvarez se había caracterizado por un gran auge del movimiento campesino que se expresó en un sinfín de movilizaciones, como las tomas de tierras y de oficinas, secuestro de funcionarios y sobre todo el surgimiento de varios frentes regionales de composición mixta (obrero, campesino, estudiantil y popular): en Oaxaca, la COCEI, la COCEO y el FCI; en Chihuahua, el CDP; en Zacatecas, el FPZ; en Yucatán, el FSY y en Puebla-Veracruz la UCI, para citar sólo algunos.

El auge del movimiento en esta fase se explica tanto por el descontento acumulado y la grave situación por la que atravesaba el campesinado —resultado de 30 años de política agraria proempresarial— como por la crisis de legitimidad de las organizaciones tradicionales (CNC, CCI, etc.); y también por la política neopopulista y agrarista de LEA que buscaba reconstruir en el campo un consenso en torno a su gobierno y relanzar la producción agropecuaria en el sector social, para hacerle frente a la crisis agrícola y recobrar la autosuficiencia alimentaria.

Con el recrudescimiento de la represión que significó la política anticampesina del gobierno de López Portillo, ese movimiento campesino disperso y fragmentado regionalmente entró, a partir de 1979, en un proceso de coordinación nacional para avanzar en sus demandas, principalmente en la lucha por la tierra. Es así como en 1979 surgió la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), conjunto de organizaciones que adoptaron este nombre, el del famoso plan de Zapata, de 1911, por considerar que éste todavía no se cumple.*

En una primera fase (1979-1980) unas diez organizaciones realizaron varios eventos encaminados a intercambiar experiencias de lucha y a iden-

* El que dediquemos más espacio en este trabajo a la lucha por la tierra se debe a que, en el período que nos interesa, fue lo que motivó mayor movilización y enfrentamientos con la política estatal y el que pongamos mayor énfasis sobre la CNPA es atribuible al carácter novedoso de este tipo de organización.

tificar intereses comunes. En este período fue cuando la CNPA depuró los agentes y organizaciones "oficialistas" que buscaban capitalizar este descontento y encauzarlo dentro del proyecto de alianza Estado-campeñinos del gobierno de López Portillo. Sin embargo, en la medida en que la demanda principal de este conjunto de organizaciones era y es la tierra, no podían apoyar un programa como el SAM que dejaba a un lado el problema de la tenencia de la tierra.

En este proceso de reconocimiento mutuo desempeñó un papel importante el apoyo de instituciones académicas democráticas (o sectores de las mismas), como la Universidad de Guerrero y la de Chapingo para propiciar el intercambio. De esta manera y después de su constitución en Milpa Alta, en octubre de 1979, la CNPA logra definir una línea de dirección autónoma respecto al Estado y el carácter de la lucha campesina e indígena. Las demandas generales más importantes formuladas por más de 40 organizaciones presentes son: la titulación y confirmación de bienes comunales, la entrega de tierras y soluciones a los diversos problemas de tenencia, el uso y disfrute de los recursos naturales, mejoras en la producción y comercialización, créditos, sindicalización agrícola y rescate de la cultura.

Desde su nacimiento la CNPA, que adopta como lema "Hoy luchamos por la tierra, mañana por el poder", se plantea el respeto a la autonomía y estructura interna de cada organización, la ayuda y colaboración mutua y la participación democrática de sus bases. En este período se obtiene una audiencia mensual en la SRA, audiencia que se convierte con el tiempo en una verdadera escuela de derecho agrario, ya que los problemas no son manejados al estilo tradicional por líderes o mediadores, sino por amplias comisiones que se turnan en esta responsabilidad.

En su segunda fase (1980-1983) la CNPA logra aglutinar a un número creciente de organizaciones que, al no encontrar alternativas organizativas en el marco de la política oficial, se acercan a las independientes (CNPA, CIOAC, UGOCM "roja") o a las que aparentan serlo (Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas-PST). Para 1983, la CNPA ya aglutinará a 19 organizaciones, dos de ellas (ACR y CCRI)* de carácter nacional y las demás regionales. En este período se intenta a través de la movilización detener la política anticampesina del gobierno de López Portillo. Se realizan dos marchas en la ciudad de México, el 12 de mayo de 1981 y el 14 de junio de 1982, la primera realizada conjuntamente con la CNTE. La marcha del 12 de mayo se proponía abrir negociaciones en Gobernación para conseguir la libertad de los presos políticos y en la SRA para la justa solución a 315 expedientes agrarios.

La respuesta estatal será un recrudecimiento de la represión y respuestas negativas o insatisfactorias a los problemas más conflictivos, lo que

* ACR: Alianza Campesina Revolucionaria; CCRI: Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente.

llevará a la CNPA a un siguiente período de reflujo y de disminución en las movilizaciones. Se aprovecha esta situación para un mayor afianzamiento interno y la adopción de estatutos y un programa (agosto de 1982). A través de este programa la CNPA busca articular las diversas aspiraciones del movimiento de masas en el campo, es decir, la lucha de los campesinos sin tierra, la de los jornaleros agrícolas, de los grupos indígenas y de las mujeres campesinas.

Es de recalcar la composición étnica de la CNPA en la cual están representadas 13 etnias distintas.* De 21 organizaciones, 14 tienen una base campesina indígena.

A partir de su V Encuentro realizado en Venustiano Carranza, Chiapas, en julio de 1982, la CNPA sostiene que su lucha es "por el cambio social que destruya la explotación y opresión social" y modifica su lema por el de "Hoy luchamos por la tierra y también por el poder".

Este cambio de lema, que expresa una concepción de clase en la lucha de las masas en el campo, manifiesta una politización de las demandas agrarias. La misma política no sólo anticampesina sino proempresarial contribuye a esta radicalización del movimiento, ya que sus integrantes pierden la esperanza de obtener la tierra sin antes obtener el poder.

A partir de 1983 hasta la fecha y en pleno reflujo la CNPA ha buscado ampliar cada vez más sus alianzas con otros sectores populares; se ha incorporado al Frente Nacional por la Defensa del Salario, Contra la Austeridad y la Carestía (FNDESCAC) y a la Asamblea Nacional Obrero Campesina Popular (ANOCP). Participó en 1983 y 1984 en dos Paros Cívicos Nacionales y los días 10 de abril de 1984 y 1985, respectivamente, convocó y realizó junto con la CIOAC y la UGOCM "roja", dos marchas campesinas a nivel nacional que, al conglomerar en la Plaza de la Constitución a cerca de 100 mil personas entre campesinos y solidarios, volvieron a poner en la mira el problema agrario.

A pesar de que el gobierno de Miguel de la Madrid ha profundizado la política anticampesina de López Portillo y abre cada vez más las puertas del ejido al capital privado, nacional y multinacional, y a pesar del reflujo de la CNPA motivado por la represión y conflictos internos, ésta sigue creciendo y aglutinando a nuevos grupos conscientes de que no existe otra solución que la unificación de todas las fuerzas que luchan por la tierra.

La CNPA es un ensayo interesante en el proceso de unificación y coordinación de varios proyectos independientes locales, regionales y nacionales, de campesinos pobres y grupos étnicos, que prueba la capacidad de respuesta de estos sectores ante políticas antiagrarias y represivas. La presencia de estos grupos coordinados expresa que son una fuerza que no puede ser excluida de cualquier proyecto nacional.

* Náhuatl, purépecham, mazahua, otomí, zapoteco, huasteco, tzotzil, tzeltal, triqui, amuzgo, chatino, chinanteco.

En la lucha por la tierra también han participado algunas organizaciones campesinas adheridas como tales a algunos de los partidos políticos de izquierda o en cuya dirección militan varios miembros de un mismo partido. Del primer caso tenemos a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) del PST, la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente (CCRI) del PRT y la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) del MRP (Movimiento Revolucionario del Pueblo), y de las segundas tenemos a la CIOAC.

La UNTA es una organización que ha movilizó un gran número de campesinos en la lucha por la tierra en los últimos años, incluso la que más recurre a tomas de tierras, cuando otras organizaciones parecen considerar que esta práctica no es muy prudente por los tiempos que corren. También parece existir un consenso respecto a que la gran represión sufrida por los campesinos de la UNTA (en la sierra norte de Puebla y en Chiapas, notablemente) bien podría ser el resultado de cierto "aventurismo" de parte de la dirección.

Esta organización presenta la particularidad de combinar un tipo de movilización aparentemente muy radical (tomas de tierras o de oficinas) y cuyo desenlace es muchas veces la represión o bien algunas soluciones parciales con un apoyo explícito a la política agraria oficial. No se han dado casos de alianzas entre esta organización y otras independientes como la CIOAC o la CNPA. Es más factible que la UNTA se vincule con la CNC.

La CCRI es una organización campesina que nació el 19 de marzo de 1977. Como organización nacional agrupa a campesinos de diversos estados como por ejemplo de Guerrero, Sonora, Coahuila, Veracruz, y estado de México. La CCRI es una de las dos organizaciones nacionales que integran la CNPA y nos parece que en la primera fase de la vida de la Coordinadora, ha desempeñado un papel importante para la unidad del movimiento campesino al buscar ante todo el crecimiento y la consolidación de la CNPA, sin sujetarla a su propia dinámica como organización campesina partidaria. Sin embargo, en la coyuntura de la campaña electoral para la elección de diputados en abril de 1985, la CCRI fue tildada, por varias organizaciones de la CNPA, de manejar la vida de la Coordinadora en función de los propósitos electorales que tenía en ese momento. Esta situación provocó la crisis de unidad más seria a la que se haya enfrentado la CNPA, en sus seis años de existencia.

El antecedente de la CIOAC es la Central Campesina Independiente, CCI que fue fundada, el 6 de enero de 1963, al calor del Movimiento de Liberación Nacional y con la participación de destacados miembros del Partido Comunista Mexicano. Se transforma en Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, en julio de 1975. En la práctica la organización de las Uniones de Crédito y la tramitación de problemas agrarios constituyen las principales actividades de la Central; aunque no son de poca importancia las movilizaciones de los obreros agrícolas por su sindica-

lización, en Chiapas y Sinaloa, y que son impulsadas por las Federaciones estatales de la CIOAC.

La CIOAC, probablemente debido a que la mayor parte de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y muchos de sus miembros militaban en el PCM y ahora en el PSUM, es una organización que, más allá de sus reivindicaciones inmediatas, plantea un programa más global y se pronuncia explícitamente por el socialismo.

Si bien la CIOAC retoma la preocupación del Estado en el sentido de la necesidad de resolver la crisis de producción de alimentos propone una solución o un camino diferente al proyecto oficial de corte productivista como es "la expropiación de toda la tierra que poseen los grandes propietarios ganaderos. Estas tierras expropiadas deberán transformarse en propiedad social, para satisfacer las necesidades y demandas de los solicitantes de tierra, en forma de ejidos y comunidades indígenas". Además, se propone "la expropiación de la agroindustria alimentaria y de la maquinaria, una política de precios de garantía redituables, subsidios a los insumos y asistencia técnica para aumentar la productividad".

Para la lucha agraria, la CIOAC combina la tramitación de expedientes agrarios en la SRA, a nivel nacional y estatal, con movilizaciones, marchas y plantones frente a la SRA o a la Cámara de Diputados.

Respecto de la participación de la CIOAC junto con otras organizaciones en frentes amplios como la CNPA o la ANOCP, la situación es la siguiente. La CIOAC tiene una política de alianzas menos selectiva que la CNPA. Por ejemplo considera posible y hasta necesario realizar acciones conjuntas con las bases de la CNC. En un principio la CIOAC participó en la CNPA, pero se alejó en 1980, después del II Encuentro Nacional. Aun cuando se habla de diferencias respecto a la prioridad de la lucha por la tierra o de la lucha sindical en el campo, nos parece que el motivo más profundo, subyacente, es una diferencia de concepción en las direcciones de la CIOAC, por una parte, y en algunas de las organizaciones agrupadas en la CNPA, por otra, sobre todo en corrientes políticas como línea de masas y el trotsquismo, respecto a la estrategia general. En este sentido, para algunas organizaciones, la CIOAC estaría interesada únicamente en el juego político electoral y en la lucha parlamentaria, con lo cual avalaría así una reforma política de dudosa respetabilidad. Por otro lado, quienes tienen participación política principalmente a nivel electoral, llegan a considerar organizaciones como la CNPA como la ultrazquierda que busca el enfrentamiento total y se le atribuye la idea de que si se empujan los movimientos hacia situaciones sin posibles soluciones, las perspectivas revolucionarias aumentarán. Como vemos en ambos casos, existe una caricaturización de las posiciones reales.

Muchas organizaciones campesinas tienen experiencias negativas con partidos de oposición, que han pretendido manipularlas y capitalizar su fuerza para su propio crecimiento y prestigio. En este sentido, nos parece que a la CIOAC se le ha dificultado su participación en la CNPA porque,

para muchos, no deja de ser la central campesina del PSUM, a pesar de las afirmaciones en sentido opuesto de sus dirigentes.

A pesar de todo, en 1982 y 1983, han fructificado las acciones conjuntas a nivel regional y nos parece que es a ese nivel donde se pueden superar los sectarismos (que expresan diferencias sobre todo entre los dirigentes) y donde es posible encontrar condiciones para una solidaridad amplia entre los campesinos de base, unidos en torno a los mismos problemas y a las mismas demandas.

El cambio de condiciones políticas y económicas en que se da ahora la lucha por la tierra implica nuevas perspectivas. Las demandas son las mismas: tierra, justicia y libertad. Lo que les da otro carácter a las mismas demandas es el terreno político e ideológico diferente en el que se plantean en el contexto de la nueva situación económica, bajo el signo de la crisis.

Hasta ahora el terreno ideológico en el que el Estado pudo utilizar el reparto agrario para ganar bases sociales de apoyo fue el de la "justicia social". Repartir la tierra, aunque fuera de mala calidad, en el papel, en el mar, o donde fuera, pero por "justicia social" o dicho de otro modo, para calmar la oleada campesina siempre movilizaba en torno a la lucha por la tierra. En otras palabras, salvo durante el período cardenista, el reparto agrario se realizó básicamente por razones políticas y no porque se veían perspectivas de un desarrollo agrícola importante en el sector ejidal y comunal. En este sentido, es cierto que, hasta ahora, el reparto agrario ha contribuido en gran medida a la estabilidad del sistema político. Sin embargo, el que haya sido así no significa que lo seguirá siendo en las nuevas condiciones impuestas por la crisis.

En la práctica ya van varias décadas de contrarreforma agraria. La diferencia no sólo radica en que ahora se le "habla con la verdad al pueblo", destruyendo la ilusión de que todos los campesinos recibirán un pedazo de tierra, sino que se ha iniciado una recuperación, tanto por la vía legislativa como por el despojo, de las tierras ejidales y comunales para el sector privado. El sexenio del presidente Echeverría fue probablemente el último en el cual se intentó enmarcar la lucha por la tierra en el terreno ideológico-político de la "justicia social".

Dentro de la política selectiva de reparto de recursos, de la tierra en particular, las mismas demandas tienen implicaciones diferentes. Desde 1979, en el nuevo discurso de la autosuficiencia alimentaria, el reparto agrario pasa a un segundo nivel para el gobierno y se trata, desde entonces, de apoyar al sector más productivo o dotado de las mejores tierras, lo que evidentemente, de aquí en adelante, limitará la base social de apoyo al gobierno entre los campesinos pobres y solicitantes de tierra.

Es de preverse que, en el futuro inmediato, el reparto de tierras, cuando se realice, buscará combinar de manera mucho más estratégica objetivos políticos y económicos. Donde la presión sobre la tierra es demasiado fuerte y cuando se trata de explotaciones poco productivas, podrán ser sacrifi-

cados los intereses de algunos latifundistas. Según el potencial agrícola de las tierras repartidas, en los últimos años, los beneficiarios del reparto agrario, o bien han sido abandonados a su destino, es decir sin recursos, o bien encuadrados en organismos económica y políticamente controlados por las dependencias gubernamentales u organizaciones oficiales.

Más que un arma de mediatización o de control político, como en parte ha sido su función hasta ahora, en las nuevas condiciones, la lucha por la tierra enfrenta a muchos de los que la sostienen con la gran burguesía agraria y con el gobierno, sobre todo a nivel de los estados. Una verdadera autosuficiencia alimentaria de corte popular es considerada por algunas organizaciones, la CIOAC entre otras, como incompatible con la actual distribución de la tierra irrigada en manos de la gran burguesía agraria.

Ante la cancelación de una reforma agraria que tenía todavía bastante camino que recorrer,* las organizaciones oficiales, por lo menos entre 1979 y abril de 1984, no parecían demasiado interesadas en disputar la bandera de la lucha por la tierra al movimiento campesino independiente. Dada la amplitud del movimiento que exige la tierra, resulta sumamente optimista la confianza del gobierno en que va a poder enfrentar la presión campesina sobre la tierra, básicamente, con los actuales programas de empleo y de subsidio al consumo, de por sí insuficientes. La CNC, lejos de impugnar el fin del reparto agrario, intenta reconquistar su hegemonía en el campo de la organización de los productores y de los obreros agrícolas.

La política agraria del gobierno de López Portillo y de los primeros años del de Miguel de la Madrid marca el fin de una etapa. Las demandas agrarias del movimiento campesino independiente se enfrentan globalmente a la política descrita y constituyen un rechazo a la política de bandera blanca y de subordinación de la economía campesina al capital privado, nacional y multinacional. Al calor de esta lucha, muchos campesinos han descubierto una nueva faceta del Estado, su carácter de clase, proempresarial y antidemocrático. Esa toma de conciencia ha llevado al movimiento independiente que lucha por la tierra, a una mayor participación en la vida política, principalmente a nivel municipal, y a veces a alianzas con otros grupos campesinos y con el movimiento urbano-popular y obrero.

Esta nueva situación abre perspectivas diferentes al movimiento campesino aunque también hay que estar conscientes de que, conforme aumente la presión campesina, el Estado siempre podrá abrir un nuevo capítulo a la reforma agraria, a menos que opte por profundizar el camino de la represión. Sin embargo, como veremos más adelante, la unificación del movimiento campesino en torno a la lucha por la tierra, pasa por la cuestión de los diferentes proyectos políticos de las corrientes en él presentes.

* Dentro de la actual legislación agraria, si se aplicara, todavía se podría repartir más de 20 millones de hectáreas.

LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN

Otra de las características del movimiento campesino en el período estudiado es que se desenvuelve en un nivel cada vez más político. Muchas de las demandas, ya sea por la tierra, por el control del proceso productivo o por la sindicalización, se han enfrentado a una respuesta represiva a varios niveles. Por un lado, la represión directa o violenta (encarcelamientos, asesinatos). Da una idea de las dimensiones de la represión el que la amnistía declarada por el presidente López Portillo en su tercer informe de gobierno incluía a 950 campesinos presos por luchas por la tierra. Después de esta amnistía y como resultado de las movilizaciones de los campesinos, de la CNPA principalmente, se decretaron leyes de amnistía en Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Michoacán.

Otra forma de represión ha sido el desconocimiento de los derechos de las organizaciones independientes, derecho a obtener el registro legal de sus sindicatos, por ejemplo, o derecho de las organizaciones de productores de participar en diferentes instancias de negociación a la par con la CNC. Además el Estado emplea mecanismos más sutiles de represión para debilitar a ejidos, comunidades y organizaciones de productores que amenazan con rebasar los marcos de las organizaciones corporativas. Para controlar a estos grupos de productores, el gobierno les impone trabas que les dificultan tener acceso al crédito, insumos, agua, asistencia, etcétera.

Para los campesinos, más que para cualquier otro grupo social, se ha desacreditado la reforma política porque se enfrentan cotidianamente a violaciones de sus derechos elementales, incluidos sus derechos políticos. La lucha por el poder municipal es inseparable en la mayoría de los casos de la lucha por la tierra, ya que sólo así se les puede restar poder político a los terratenientes y comerciantes. Sin embargo, casos como la agresión gubernamental anticonstitucional contra el ayuntamiento popular democráticamente elegido de Juchitán y otros del mismo tenor han demostrado de manera dramática la contradicción entre la reforma política y el ejercicio de los derechos políticos. Los sexenios de la apertura democrática y de la reforma política han estado permanentemente bajo el signo de la represión.

En este sentido, en sus reivindicaciones económicas, una parte cada vez más importante del movimiento campesino se enfrenta a diario a una estructura de poder político y a la conciencia de que se requieren cambios más profundos para obtener soluciones positivas. Esto es lo que le está dando una dimensión cada vez más política al movimiento campesino.

LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

Este frente de lucha se desarrolló principalmente en aquellas zonas en

las que la explotación irracional de algunos recursos, como el petróleo, devastan los terrenos de cultivo y alteran el medio ambiente. Varias comunidades no sólo defienden la conservación de sus suelos para el cultivo, sino también aquellos recursos que complementan su actividad agrícola o que existen dentro de sus límites territoriales. Es así como se observan luchas campesinas para proteger los ríos, lagos, lagunas, etc. También se han dado movilizaciones para asegurar una explotación racional de los bosques y demás recursos que poseen las comunidades.

La manifestación de la lucha campesina en este frente de lucha ha dejado novedosas experiencias organizativas. Muchos movimientos tuvieron una marcada composición social intersectorial e interclasista y, a diferencia de otros, su difusión fue mayor debido, en gran parte, al apoyo de las voces ecologistas. En el caso del Pacto Ribereño, se dio la participación de campesinos ejidatarios pobres y medios, hasta de pequeños propietarios acomodados. También la lucha de los habitantes ribereños del lago de Pátzcuaro en contra de la instalación de un centro de investigaciones nucleares, tuvo una composición social heterogénea y su difusión llegó incluso a foros internacionales.

Si bien la lucha de los campesinos por la defensa de sus recursos ha tenido el apoyo, no siempre orgánico, de agrupaciones ecologistas, las organizaciones campesinas le han dado un contenido clasista a estos movimientos. Las organizaciones campesinas que reivindican estas demandas no sólo están en contra de la explotación irracional de sus recursos, sino que también exigen ser los directamente beneficiados del aprovechamiento de éstos.

LA LUCHA POR EL CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO

En el período estudiado, se observa un intento por darle continuidad a la lucha independiente por la tierra a través de la organización de la producción.

Entre los grupos organizados en torno a la producción y la comercialización, la composición de clase del campesinado es muy heterogénea. Tenemos desde antiguos jornaleros que, después de un período de lucha por la tierra conquistaron ésta, pero frente a la oposición concertada de la burguesía agraria y de las dependencias gubernamentales así como de las centrales oficiales, tuvieron que organizarse colectivamente y de manera independiente para conservar lo ganado. Por otro lado, existen organizaciones de pequeños productores tradicionalmente controlados por organizaciones oficiales. Entre ellos, las condiciones económicas y culturales varían mucho: desde campesinos pobres, indígenas muchas veces, hasta campesinos medios, e incluso muchos con un nivel de acumulación bastante importante como por ejemplo los ejidatarios del Valle del Yaqui. En algunos

casos, los productores son a la vez asalariados en ciertas épocas del año, y en otras, los mismos campesinos emplean trabajadores eventuales. Algunos son productores comerciales de granos básicos, mientras que los otros son consumidores de estos mismos productos. Esto crea una contradicción permanente, ya que la exigencia de aumentos de precios de los básicos de los primeros, repercute en el aumento del costo de la vida para los segundos.

El movimiento de productores no sólo corresponde a grupos con una composición de clase muy heterogénea (en cuanto a ingresos, rasgos culturales, y fracciones de la burguesía a las cuales se enfrentan) sino que además sus experiencias organizativas son muy diversas. Por ejemplo, para algunas de las organizaciones de este frente de lucha, la movilización es una experiencia nueva, ya que la mayoría estaba acostumbrada al estilo de las organizaciones oficiales, es decir, a la tramitación y negociación por medio de los cuadros políticos tradicionales de las centrales a cambio de apoyo al partido en el poder.

Sin embargo, a pesar de esta diversidad, es claro que las dificultades y limitaciones a las que se enfrentan los pequeños productores son el resultado de la manera como los recursos son repartidos entre las regiones y los productores. Aun cuando en la mayoría de los casos la contradicción se establece con las dependencias gubernamentales y no directamente con la gran burguesía agraria, este hecho pone de relieve la orientación clasista del gobierno que canaliza los subsidios y créditos de manera preferencial hacia el sector empresarial.

En el sexenio de López Portillo, el SAM, si bien recibió el rechazo de los grupos organizados de manera independiente en torno a la lucha por la tierra, fue aprovechado momentáneamente por algunos grupos de campesinos de las centrales oficiales y también de algunas organizaciones independientes. Sin embargo, la misma crisis económica y política ha puesto a prueba las premisas político-ideológicas de la alianza entre el Estado y los campesinos. El SAM era un proyecto muy costoso y con la crisis se tuvo que cancelar y dejar actuar libremente las leyes del capitalismo: producir los granos allí donde los subsidios puedan ser mejor aprovechados, es decir, en condiciones de mayor productividad y de menores costos para el abastecimiento del mercado interno (en granos básicos). La fijación de precios de productos básicos incosteables para el pequeño productor lleva como resultado a su desplazamiento del mercado por las grandes empresas más tecnificadas y la sustitución de parte de la producción nacional por la importación.

Esta política es la que ha ocasionado el surgimiento de un frente nacional de organizaciones de productores.

Entre las agrupaciones de campesinos independientes que en los últimos tiempos han encabezado importantes movimientos en el renglón de la producción figuran entre otras, la Coalición de Ejidos Colectivos del Yaqui y del Mayo de Sonora, la Alianza Campesina del Noroeste de Chihuahua,

la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos de Solidarios de Chiapas, la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca Hidalguense (URECH), la Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas de Nayarit. Estas y otras organizaciones regionales y locales de productores (más de 30 actualmente) han constituido, tras una serie de encuentros realizados entre 1982 y 1984, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

En los últimos años algunas de estas organizaciones han realizado acciones conjuntas como la huelga del maíz encabezada por la Unión Lázaro Cárdenas, de Nayarit, en 1983, bloqueos de carreteras y tomas de oficinas o bodegas realizadas simultáneamente por varias de las organizaciones.

Las demandas planteadas por este conjunto de organizaciones, en su Segundo Encuentro Nacional en 1983 eran: fijación de una escala móvil de precios que compensara los incrementos en los costos de producción; participación en la fijación de los precios de garantía a través de las comisiones correspondientes; formación de comités regionales por parte del gabinete agropecuario para que se fijen precios de garantía diferenciales con base en las condiciones económicas y productivas de cada zona; reorientación de los subsidios a los productos alimenticios para que en vez de beneficiar a los industriales y acaparadores se destinen a los productores mediante un programa de agroindustrialización; aumento inmediato a los precios de algunos granos básicos; seguridad jurídica a los ejidos colectivos, etcétera.

Además de este frente de organizaciones campesinas regionales de productores, la CIOAC cuenta con la UNCAFAECSAC (Unión Nacional de Crédito Agropecuario, Forestal y de Agroindustrias de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios Minifundistas). Actualmente son 21 las uniones regionales que integran esta organización, cuyas demandas son: apoyo irrestricto a la propiedad social, al ejido y a la comunidad indígena, precios de garantía remunerativos que compensen los altos costos de producción, subsidios a la agricultura, la ganadería y las explotaciones forestales, como mecanismos para bajar los costos, asistencia técnica, aumentos de los créditos al campo, expropiación de la industria alimentaria y el gran comercio, expropiación de toda la maquinaria agrícola y de toda la tierra acaparada por los grandes propietarios, explotación colectiva y organización cooperativa, democratización de ejidos y comunidades ("Resoluciones del V Congreso de la CIOAC sobre el problema campesino").

Otras organizaciones pertenecientes a la CNPA levantan demandas relacionadas con mejores condiciones para la producción. Sin embargo, en este frente de lucha, por el control del proceso productivo, es escasa la unidad de acción entre estos tres bloques que luchan por las mismas demandas, o sea entre la UNORCA y la CIOAC o entre la CNPA y la UNORCA. Las marchas realizadas conjuntamente por CNPA y CIOAC han sido la única articulación a nivel nacional. Sin embargo, a nivel regional, la ORCO (Or-

ganización Regional Campesina de Occidente), de Jalisco, se logró vincular con la Unión Lázaro Cárdenas de Nayarit adherida a la UNORCA; asimismo en Chiapas, la OCEZ de la CNPA y la CIOAC realizan a veces acciones conjuntas. Donde no se observa ninguna articulación es entre la UNORCA y la CIOAC.

Respecto a la UNORCA, las dificultades a las que se enfrenta la constitución de un frente de esta naturaleza son inherentes a la composición de clase heterogénea a la que nos acabamos de referir. Si bien por lo pronto muchas demandas son comunes, en el largo plazo, los intereses de clase pueden diferenciarse.

Para muchos, no quedan claros los propósitos o las perspectivas políticas de mediano plazo de este frente, sobre todo debido a la participación mixta de organizaciones ligadas a centrales oficiales, otras independientes, pero influidas por determinadas corrientes políticas y también por la participación en otras más de funcionarios de alto nivel. Para algunos grupos políticos, éstas son razones suficientes para desconfiar de este proyecto al que no le ven posibilidades de desarrollar una política independiente y de construir una línea alternativa anticapitalista que beneficie al campesinado.

Este tipo de juicio nos parece no sólo sectario sino precipitado, si se toma en cuenta el estado incipiente del nuevo frente del que se habla. La constitución de organizaciones de masas y de grupos de presión en todos los niveles le disputa a las organizaciones oficiales la exclusividad del derecho de representación de los campesinos en las instancias de decisión y la Coalición de los Ejidos colectivos del Valle del Yaqui llevará, en un plazo relativamente corto, a estos reacomodos internos y surgirán varios proyectos nuevos. Al mismo tiempo, como es costumbre, ante esta sacudida, la CNC radicalizará eventualmente algunas de sus posiciones, recurrirá en algunos casos a la movilización de sus bases y rescatará de esta manera algunas de las organizaciones que amenazaban salirse de su área de influencia. Además, a diferencia de lo que sucede en el frente de lucha por la tierra, la CNC seguirá recibiendo el apoyo oficial para organizar a los productores, sobre todo frente a la posibilidad del surgimiento de una poderosa coalición nacional de organizaciones independientes de productores.

Sin embargo, a pesar de las dudas que se puedan tener, a pesar del destino manifiesto de muchos de esos movimientos que no llegan a ser otra cosa que una sacudida para la CNC y que acaban siendo recuperados, este nuevo frente está abriendo brecha y corresponde a uno de tantos esfuerzos por democratizar la vida política nacional.

LA LUCHA SINDICAL

La lucha por la organización sindical de los obreros agrícolas es la que ha tenido el menor desarrollo en el período 1976-1984. Entre los fac-

tores más importantes que limitan la organización sindical en el campo se destacan: la eventualidad del trabajo inherente a los ciclos productivos en la agricultura, la procedencia de los jornaleros de regiones donde las condiciones económicas son muy diversas y por lo tanto las necesidades y expectativas salariales diferentes también, la vinculación de muchos de estos trabajadores a una unidad de producción o a una comunidad, por lo que no se encuentran totalmente proletarizados y siguen luchando por una ampliación de su ejido, una nueva dotación o contra los acaparadores incluso. Otro obstáculo es la represión ejercida contra los grupos independientes al negarles sus derechos sindicales, ya sea al no reconocer legalmente sus organizaciones, por medio del registro correspondiente, ya al perseguir o privar de empleo a quienes se organizan para defender sus derechos. El registro legal de los sindicatos es un requisito para poder firmar contratos colectivos con los patrones, por lo que sí reviste su importancia para los obreros agrícolas.

Aun cuando no se puede hablar de un movimiento sindical de carácter nacional, como en el caso de la lucha por la tierra, cabe destacar en el período referido la formación de dos sindicatos nacionales e independientes de obreros agrícolas: el de la CIOAC y del PMT (SITRAC) que están dando luchas de tipo sindical en algunas regiones. Además, como se señaló anteriormente, ha habido por varias partes del país brotes espontáneos de organización de los jornaleros, ya sea por aumentos de salarios (sobre todo en este período de tope salarial simultáneo a la inflación más alta jamás vista), ya por la obtención de servicios (agua, luz, escuelas, casas, asistencia médica, despensas).

No hay que confundir la existencia formal de sindicatos nacionales con un movimiento nacional por la sindicalización agrícola. En este sentido, para algunos, la CIOAC le daría una importancia excesiva al registro de su sindicato nacional, preocupándose "por formar el cascarón primero". La no generalización de la lucha sindical en el campo es un hecho, y no es el voluntarismo o una mayor actividad de los cuadros de una central lo que hará surgir más sindicatos en el campo, cuando no se alteran los factores objetivos señalados anteriormente. Es evidente que si las luchas laborales cundieran por todo el país, la cuestión del registro pasaría a un segundo plano, para la CIOAC en primer lugar. Mientras tanto, no se le puede restar importancia a la exigencia del reconocimiento oficial de un sindicato independiente y no se puede dejar de impugnar el monopolio de las organizaciones oficiales sobre el derecho a la sindicalización.

Contrariamente a un prejuicio que ha cundido en algunos medios, la lucha sindical no es concebida por la CIOAC como excluyente de la lucha por la tierra. Al contrario, a partir de su V Congreso en 1983, la CIOAC plantea que las instancias organizativas de los solicitantes de tierra, los comités agrarios, deben funcionar a la vez como núcleos de organización sindical.

Tanto en la lucha por la tierra como por la sindicalización, los obreros agrícolas y los campesinos pobres —solicitantes de tierra—, se enfrentan a la gran burguesía agraria y ganadera. En un análisis regional sobre la burguesía agraria se podría ver que existen diferencias cualitativas y cuantitativas muy importantes entre la burguesía rural del Noroeste, por ejemplo, y la de los Altos de Chiapas, los ganaderos de las Huastecas o pequeños caciques y acaparadores que, por doquier, representan el germen de la penetración del capitalismo. A pesar de las diferencias internas en el seno de la burguesía rural, existe un elemento común muy importante, ya sea en el norte o en el sur, en las sierras o en los distritos de riego, y es la vinculación entre las clases dominantes y el poder local y regional. Ese elemento es el que puede contribuir a la formación de una conciencia de clase que ayudaría a enmarcar las luchas regionales en un movimiento sindical de envergadura nacional. En la medida en que las organizaciones que luchan por la tierra, como la CNPA y la CIOAC, vinculen entre sí las diferentes experiencias sindicales como lo han hecho con los grupos que luchan por la tierra, se irá conformando un verdadero movimiento sindical de carácter nacional. Mientras tanto, la lucha sindical permanecerá aislada y no logrará una dimensión nacional como la lucha agraria.

Los que en un momento sostienen un tipo de lucha sindical, y en otro, agrario, son los mismos protagonistas. Igualmente son los mismos capitalistas quienes en un momento son enfrentados como patrones y en otro como terratenientes. En los años treinta, ante la negativa de las grandes haciendas de respetar los derechos laborales y su incapacidad para resolver la crisis de producción agrícola, la lucha sindical se transformó en lucha agraria y se modificaron las leyes para afectar la propiedad privada y dotar a quienes hasta ese momento no tenían derechos agrarios. En 1984, la correlación de fuerzas es distinta y también se modifica la legislación, sólo que ahora para proteger más la propiedad privada y facilitar la expansión del capitalismo. La lucha por la tierra y la lucha sindical no sólo no son percibidas por las organizaciones campesinas como luchas excluyentes sino que empiezan a ser concebidas como dos fases de un mismo proceso.

LA LUCHA POR EL ABASTO DE PRODUCTOS BÁSICOS

Frente a la agudización de la crisis agropecuaria y a la cada vez mayor dependencia de los campesinos del abastecimiento de granos básicos, generalmente de importación, el movimiento campesino ha comenzado a experimentar nuevas formas de organización independiente o recuperar algunas ya existentes. La profundización de la crisis por la que atraviesa el país y las políticas de austeridad que se traducen en la disminución del gasto público en programas de asistencia social, apuntan hacia una mayor beli-

gerancia de los grupos campesinos que padecen bajos niveles de producción de granos básicos y que los ponen a merced de los acaparadores.

Algunas organizaciones campesinas de este frente no sólo cuestionan las políticas de subsidios que, en general, tienden a profundizar las diferencias y desigualdades regionales ya que no apuntan hacia cambios en la estructura productiva en las regiones, sino que también ponen en el plano nacional la cuestión del uso de los alimentos como arma política. Varias comunidades se organizan principalmente para que los programas destinados a ellas se desarrollen eficientemente y que no desaparezcan en la maraña burocrática.

En ciertas regiones del país, generalmente, en donde se han dado movilizaciones campesinas de cierta envergadura, el gobierno ha recurrido con mayor frecuencia en varias comunidades al condicionamiento del abasto de productos de primera necesidad a la presentación de una credencial que demuestre la afiliación de sus habitantes al PRI o a alguna de sus organizaciones corporativas.

Para contrarrestar esta actitud gubernamental, algunos grupos campesinos han logrado ejercer cierto control sobre las tiendas rurales oficiales encargadas del abastecimiento de granos básicos. En otros casos, se han organizado en cooperativas por iniciativa propia o bien por un programa institucional. En ambos casos, las comunidades han tenido que dar una batalla frontal para recuperar los espacios democráticos para su participación, establecidos en los diversos programas de abasto. Tales son los casos protagonizados por los comités de las tiendas CONASUPO.

La lucha de las comunidades que se han organizado en cooperativas de consumo para contrarrestar la carencia de productos básicos, no sólo se enfrentan a los organismos oficiales encargados del abasto, sino también a la injerencia de las organizaciones campesinas oficiales y semioficiales que, buscando controlarlas, rompen los procesos democráticos iniciados en éstas. Otro enemigo de las cooperativas y comités de abasto son los grandes y medianos comerciantes de las regiones. La mayoría de las veces, los enemigos a los que se enfrenta este tipo de organizaciones se alían en un frente común, dependencias, líderes oficiales y comerciantes de la región. Aún así, varias comunidades han comenzado a reconquistar los espacios que les han abierto algunos programas para, en primer lugar, evitar, hasta donde sea posible, el uso del abasto de granos como arma política, como ha sucedido en contra del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, MULT, y en ciertas regiones del estado de Guerrero.

Algunos análisis de investigadores, de organizaciones o de partidos políticos dan una imagen, a nuestra manera de ver, más que optimista, triunfalista (en algunos casos romántica) del movimiento campesino. La coordinación nacional de varios movimientos que se da desde 1979 es definitivamente

un paso hacia adelante; los encuentros campesinos, las audiencias colectivas han sido una escuela de formación muy importante. Sin embargo, la continuidad de la política anticampesina con modificaciones jurídicas y constitucionales antipopulares, disposiciones presupuestarias ajustadas a la política de austeridad con base en el modelo FMI, el burocratismo y el tortuguismo en la SRA, los desalojos de predios ocupados por los campesinos y los bajos precios de garantía se han podido implantar porque el movimiento campesino no tiene todavía la fuerza suficiente para contrarrestar esta política.

La falta de fuerza tiene que ver con la ausencia de un proyecto común que pueda unificar al movimiento campesino.

De hecho, las organizaciones levantan las mismas demandas pero, a pesar de las numerosas coincidencias presentes en el movimiento campesino, éste se sigue manifestando todavía de manera fragmentaria (aunque cada vez menos) debido en parte a las diferencias estratégicas entre las corrientes políticas que intervienen en él.

Para muchas organizaciones, el problema agrario no puede encontrar soluciones dentro de la actual estructura de poder y correlación de fuerzas, por lo que el problema resulta eminentemente político. En este sentido, algunas organizaciones campesinas (CIOAC-CCRI), además de su trabajo organizativo, tienen una actividad directamente vinculada a tareas políticas de tipo electoral a diferentes niveles. Además de la lucha estratégica por la conquista de poder, se parte de la idea de que, en el corto plazo es importante arrebatarle a la burguesía ciertos espacios de poder, principalmente a nivel municipal. En el seno de la CNPA, no todas las organizaciones comparten el mismo punto de vista respecto a la participación electoral o a la necesidad de la construcción del partido. Sin embargo, con el pretexto de esta independencia, algunas de estas organizaciones tienen más temores de acercarse a otras organizaciones independientes que a algunas semificiales.

El movimiento campesino refleja el problema de la división dentro de la izquierda, división establecida en torno a enfoques y prácticas diferentes respecto a la concepción de la relación entre las organizaciones de masas y los partidos, y de la participación en el estrecho espacio político abierto por la reforma política (o sea el problema electoral). Aun cuando a nivel de un programa inmediato (por ej. expropiación de latifundios), sería relativamente fácil la unificación del movimiento campesino, muchas veces las posibles alianzas se ven bloqueadas por la oposición entre diferentes proyectos políticos.

En términos un poco gruesos, digamos que en este momento una parte de la izquierda privilegia la creación de las organizaciones amplias de masas, mientras que otra se desenvuelve cada vez más en los espacios abiertos por la reforma política, la Cámara de Diputados y la lucha electoral a nivel municipal y estatal, principalmente. Aun cuando la gran mayoría

de las organizaciones de izquierda convergen en la ANOCP, que es actualmente el proyecto de frente popular unitario, existen divergencias de carácter estratégico que dificultan una unidad de acción más permanente. Para las primeras, la represión y la falta de democracia en todos los niveles, hacen que la reforma política no sea más que una farsa y que la participación en ella le dé mayor legitimidad al Estado, sin realmente permitirle al pueblo organizarse por la defensa de sus intereses.

De este modo, se da una especie de corte sobre la base de la afinidad en los proyectos políticos más que a partir de las características mismas de las clases explotadas del campo y de sus demandas. Es así como, en el período 1979-1984, era más fácil que la CNPA fuera acompañada en sus movilizaciones por grupos de obreros, maestros y colonos con cuyas direcciones existía esta afinidad política, que por otras organizaciones campesinas. Sin embargo, la misma crisis parece estar venciendo el sectarismo y podría ser que las marchas del 10 de abril de 1984 y de 1985 marquen el inicio de una nueva época.

Si la unidad de acción del movimiento campesino independiente es un requisito para enfrentar el proyecto de la burguesía para el campo, otra condición para lograrla sería una mayor participación del movimiento obrero, no sólo en la solidaridad con el movimiento campesino sino en el análisis y la discusión conjunta de los problemas agrarios y de las alternativas políticas en el campo. Las clases urbanas explotadas están directamente afectadas por las políticas agropecuarias también y, en este sentido, les corresponde desempeñar un papel activo en la búsqueda de alternativas populares.

A la política de austeridad aplicada por el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, algunos sectores de los trabajadores han respondido con la movilización. El movimiento campesino ha sido seguramente de los más ruidosos, no obstante encontrarse en una situación muy difícil y en muchas regiones en un cierto reflujó. Uno de los sectores más afectados por la crisis y la política de austeridad ha sido el campesinado, de allí su respuesta constante con tomas de oficinas, marchas, bloqueos de carreteras, huelgas de entrega de productos, etc. Parecería que los resultados han sido escasos no sólo en el sentido de la no solución a los miles de expedientes agrarios pendientes, del establecimiento de precios de garantía bajos y de la restricción de créditos, sino en general en el sentido de la profundización de la política anticampesina y de la represión. Sin embargo, sin este amplio movimiento campesino de resistencia, sin este muro de contención, la represión y la explotación hubieran sido más salvajes aún. El mayor logro del movimiento hasta ahora es por una parte su avance en la coordinación nacional y, por otra, la lenta erosión del aparato corporativo que implica el disputarle a las organizaciones oficiales el monopolio de representación del campesinado.

Hablamos de dispersión del movimiento campesino, sin embargo, cada

encuentro realizado, cada marcha, cada volante, cada nota, periodística, son unos entre tantos pasos hacia la unificación de la protesta campesina. Esto ha sido el esfuerzo de muchos grupos solidarios con el movimiento campesino: maestros, colonos, obreros, estudiantes, profesionistas, periodistas, y por supuesto de los campesinos principalmente. En este sentido, con relación al movimiento obrero independiente, la coordinación campesina nacional no se queda atrás.

En el curso de 1983 y 1984, sin descuidar la coordinación nacional, los diferentes grupos en lucha, ya sea por la tierra o por la producción, han desarrollado nuevas formas de coordinación regional. La política federal de descentralizar las diligencias agrarias, dando mayores prerrogativas a los delegados estatales de la reforma agraria y a los gobernadores, cambia en gran medida el escenario de la movilización de la capital federal a las capitales de los estados. El objetivo principal de estas medidas es el de quebrar la solidaridad nacional naciente entre los campesinos y entre ellos y la opinión pública nacional, volver a sumirlos en el aislamiento, en el olvido y seguido, en las matanzas impunes.

Desde estas perspectivas, el enfrentamiento será aún más directo y más visible el vínculo entre el poder político estatal, las autoridades agrarias y los terratenientes. Las esperanzas para enfrentar esta nueva situación son las movilizaciones simultáneas a nivel regional y nacional. Otra observación que hemos podido realizar es que, en algunos casos, las diferencias políticas que constituyen un estorbo para la unidad a nivel nacional, son más fácilmente superables en el plano regional, cuando se trata de acciones en las cuales están involucrados directamente los grupos campesinos, por supuesto.

El elemento aglutinador de todos los frentes de lucha se vincula al otro aspecto logrado por el movimiento, es decir el haber puesto en evidencia la crisis de legitimidad del aparato corporativo. En efecto, es en el rescate del derecho a la organización y a la defensa de los derechos civiles más elementales donde se seguirá forjando la unidad. La respuesta del gobierno a las últimas movilizaciones del movimiento campesino independiente que lucha por la tierra, es decir de activar la solución de los trámites agrarios presentados por las organizaciones oficiales y semioficiales, revela una mayor preocupación por no perder el control político que por resolver los problemas de los campesinos. Hasta qué punto la capacidad del gobierno de reabrir un paréntesis agrarista logrará desmovilizar a los campesinos organizados de manera independiente, es algo difícil de prever. Sea que el gobierno responda con la represión o con la negociación, los trabajadores del campo están cada vez más conscientes de que la respuesta estatal busca principalmente impedir su organización independiente y que sólo ésta puede aportar soluciones de fondo o para decirlo con las mismas palabras de campesinos de Oaxaca y Zacatecas: "Porque lo hemos aprendido, sólo con la presión hemos resuelto nuestros problemas." "Entende-

mos que esta lucha va a ser prolongada: después de hacer una gran marcha nacional, vamos a tener que hacer una lucha de largo alcance para cambiar estas cosas. Ahora vamos a conseguir que el pueblo se entere de la situación en que se encuentran los campesinos y de la política anticampesina que sigue el gobierno.”